

INFORME - Darfur: estado de la cuestión

Carlota García Encina, Real Instituto Elcano

Darfur, región musulmana situada en el oeste de Sudán, es el escenario de una gravísima crisis humanitaria. El levantamiento, en febrero de 2003, de dos grupos rebeldes, definidos como no-árabes o africanos, contra el régimen de Omar al-Bashir por la marginalización de la región provocó una brutal represión por parte del gobierno y de las milicias árabes pro-gubernamentales denominadas *Yanyawid*, que aún hoy continúa. Las escalofriantes cifras de víctimas y desplazados han dado la voz de alarma a una comunidad internacional cuya respuesta no ha estado, por ahora, a la altura de las circunstancias.

El 19 de noviembre de 2004 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución, bajo el Capítulo VII, sobre la situación que se vive en Sudán. Por un lado, el Consejo quería llevar a buen fin el proceso de paz que pondría definitivamente fin a una larga guerra civil que dura más de 20 años y que enfrenta al gobierno sudanés, apoyado por las elites del norte y del centro del país, y los rebeldes del sur, cristiano y animista; por otro, se debía afrontar la gravísima situación que se vive, desde febrero de 2003, en la región occidental de Darfur. El Consejo se reunió en Nairobi en un acto simbólico que no es habitual en él, ya que apenas sale de su sede en Nueva York. Ante dicho gesto las expectativas de que se tomarían medidas concretas para frenar la crisis humanitaria en Darfur eran grandes; sin embargo, se vieron empañadas por la aprobación de la débil Resolución 1574, que se centró en la larga guerra entre el norte y el sur y apenas mencionó la crisis de Darfur. El conflicto en la región occidental del país ha sido tachado de genocidio por el Congreso y el gobierno norteamericano, y por algunas organizaciones humanitarias. Hay quienes lo califican como un acto de limpieza étnica y Naciones Unidas considera que en la región se vive la mayor crisis humanitaria del mundo. Pero, después de 23 meses, en Darfur simplemente hay una terrible sensación de abandono por parte de la comunidad internacional.

Un país desconocido

Sudán, el país más grande del continente africano, donde se enlaza el África árabe y el África negra, posee una posición geopolítica excepcional. Limita con Libia y Egipto por el norte y con Kenia, Congo y Uganda por el sur. Tiene costa en el Mar Rojo, frontera con Etiopía y Eritrea por el este y con Chad y la República Centroafricana por el oeste. Los sudaneses son pobres, con una esperanza de vida de poco más de 55 años, un 40% de la población es analfabeta y ocupan el puesto 139 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Entre la población hay musulmanes (70%), cristianos y animistas, y les une la lengua árabe, aunque existen numerosos dialectos. La región conflictiva es Darfur, integrada por tres divisiones administrativas en la zona occidental del país. Es una región sin salida al mar situada en el corazón del desierto del Sahel, con una extensión similar a la de Francia y con una población que supera los 6 millones de habitantes.

Gráfico 1. Mapa geopolítico de Sudán



Map No. 3707 Rev. 7 UNITED NATIONS
May 2004

Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

Fuente: Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sección de Cartografía, Naciones Unidas, mayo de 2004.

Lo que comúnmente caracteriza a la guerra en Darfur –la guerra entre “árabes y africanos”– oscurece una compleja realidad étnica. Algo más del 70% de la población de la región se identifica como africanos negros o no-árabes y el resto como de ascendencia árabe. La región está poblada por más de 80 grupos tribales que pertenecen a una u otra categoría, pero todos ellos son musulmanes y, debido a décadas de mezcla étnica, la mayoría son de piel oscura y rasgos africanos. Para un visitante apenas existe una diferencia visible entre ellos. La población de ascendencia árabe tiende a ser nómada, pastoreando camellos en la zona norte de la región y ganado vacuno en el sur. Los denominados africanos ocupan principalmente la zona central y se dedican a la

agricultura, aunque hay ciertos grupos, como los Zaghawa, que alternan los cultivos con el pastoreo de ganado. Las discordias entre las tribus, por motivos económicos y no por razones étnicas, han acontecido durante más de tres décadas. Se trataba de enfrentamientos esporádicos y de baja intensidad que resolvían recurriendo al arbitrio de los jefes de las diferentes tribus¹. A partir de los años 80, afectados por una grave sequía y desertificación, las disputas fueron adquiriendo mayor intensidad. Los pastores se vieron obligados a desplazarse hacia el sur y tuvieron que competir con los agricultores por una tierra limitada. La sequía fue perseverante durante más de una década y el régimen pluviométrico fue extendiéndose hacia el sur, entre 1976 y 1985, en unos 100 kilómetros.

El concepto de “arabidad”, mientras tanto, empezaba a adquirir connotaciones políticas como resultado de la acción propagandística del coronel Gadafi, que alimentaba los sueños de un “cinturón árabe” en África. Había reclutado nómadas de Darfur y árabes del Chad para invadir el país de estos últimos en 1980 y, aunque fracasó, el legado de las armas, la organización de las milicias y la supremacía ideológica de los árabes empezaron a calar.

A finales de la década de los 80, y sobre todo con la llegada al poder del islamista Omar al-Bashir en 1989, la guerra por el control de los recursos naturales en Darfur se transformó en una larga escalada de violencia y confrontación de carácter racial y connotaciones étnicas. Al-Bashir empezó a acentuar las diferencias tribales con su apoyo y aliento declarados a las tribus arabizadas frente a los no-árabes, considerados menos leales. Los medios empleados tradicionalmente para evitar y resolver los conflictos interétnicos se convirtieron en impracticables. El gobierno logró, además, obtener el apoyo militar de las tribus nómadas árabes para luchar contra los rebeldes cristianos del sur de Sudán, contra los que entablaba desde hace años una larga guerra civil.

La guerra civil

Sudán ha estado permanentemente en guerra desde su independencia en 1956, salvo un período de 11 años entre 1972 y 1983. El conflicto entre las fuerzas del gobierno central, árabe y musulmán y apoyado por las elites del norte y centro del país, y las fuerzas rebeldes situadas en el sur del país, cristianas y animistas, se inició a los pocos meses de proclamarse la independencia. Los rebeldes se levantaron en armas en un intento de obtener cierto grado de autonomía, que alcanzaron en 1972 con la firma del Acuerdo de Paz de Addis Abeba.

En 1978, durante el periodo de paz, se descubrieron los primeros yacimientos de petróleo en el sur del país, aunque no empezaría a explotarse hasta 1998. El gobierno de Nimeiri, el entonces presidente, presentó un proyecto de ley para establecer un nuevo trazado de las fronteras administrativas de manera que los yacimientos pasaran a formar parte de las provincias del norte, pero el proyecto quedó archivado ante las protestas de algunos miembros del parlamento. En 1983 la guerra estalló de nuevo tras la decisión del gobierno de imponer la *sharia* en todo el país, incluidos a los cristianos y animistas. Se derogó el Acuerdo de Paz de Addis Abeba y Nimeiri decidió debilitar la unidad del sur dividiendo la región en tres partes y privándoles del derecho de controlar sus propios recursos, entre ellos el preciado petróleo. Además, estableció una serie de

¹ *International Herald Tribune*, “Sudan: A Complex Ethnic Reality with a Long History”, por R.S. O’Fahey, 15/V/2004.

medidas para que en el futuro el refinado y exportación del crudo se llevaran a cabo en el norte del país y no en la zona meridional. Desde 1983 y durante casi 20 años, las fuerzas cristianas y animistas, bajo la denominación de Ejército/Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLA) y lideradas por John Garang, lucharon contra el gobierno central. Con el inicio del desarrollo del sector petrolífero a finales de los años 90, la oposición del gobierno a las tesis separatistas del sur brotó con aún mayor fuerza. No fue hasta el año 2002 cuando se iniciaron las conversaciones de paz, en Kenia, bajo el auspicio de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)² y con EEUU, el Reino Unido, Noruega e Italia como observadores. Se estima que alrededor de 2 millones de personas han perdido la vida en este conflicto, la mayor parte de ellas cristianas. En el transcurso de las negociaciones de paz, se han firmado seis protocolos³ que incluyen la celebración de un referéndum de autodeterminación en 2010 para el sur tras un primer periodo de transición, el reparto de los beneficios del petróleo entre el norte y el sur, y fórmulas para compartir el poder político. Sólo falta que se redacte el alto el fuego definitivo que, según el Acuerdo de Entendimiento firmado el 19 de noviembre de 2004 entre las partes, deberá firmarse antes de final de año. Sin duda, la aparición en escena de las intensas luchas en Darfur desde principios de 2003 y el grave deterioro de la situación humanitaria en esta zona occidental del país, ha empañado este extenso proceso de paz que deberá poner fin a la guerra más larga del continente africano.

La crisis

El gran estallido de violencia en Darfur data de febrero de 2003. No ha sido el único de los últimos veinte años pero sí el más sangriento desde que los enfrentamientos tribales, debidos a la sequía y el hambre, comenzaron a agravarse a finales de los 80. En aquel momento las tribus arabizadas decidieron organizarse para obtener el apoyo financiero y militar oficial de las autoridades del país para su causa en la región. Ante dicha amenaza, las tribus convencionalmente llamadas africanas organizaron milicias propias para la autodefensa. Hay que añadir algunas medidas administrativas por parte del gobierno central, como la división en 1989 de Darfur en tres regiones, que a su vez fueron subdivididas en distritos y consejos locales, y otra partición en 1995. Ambas medidas llevaron aparejadas la reasignación de tierras a favor de las tribus árabes y sin tener debidamente en cuenta las complejas relaciones intertribales. Saqueos, quema de cultivos, expulsiones y asesinatos se han sucedido en estos años, como ha recogido asiduamente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los enfrentamientos en Darfur, sin embargo, han estado siempre en el olvido, principalmente porque la guerra civil entre el norte y el sur se había adueñado de todo el protagonismo.

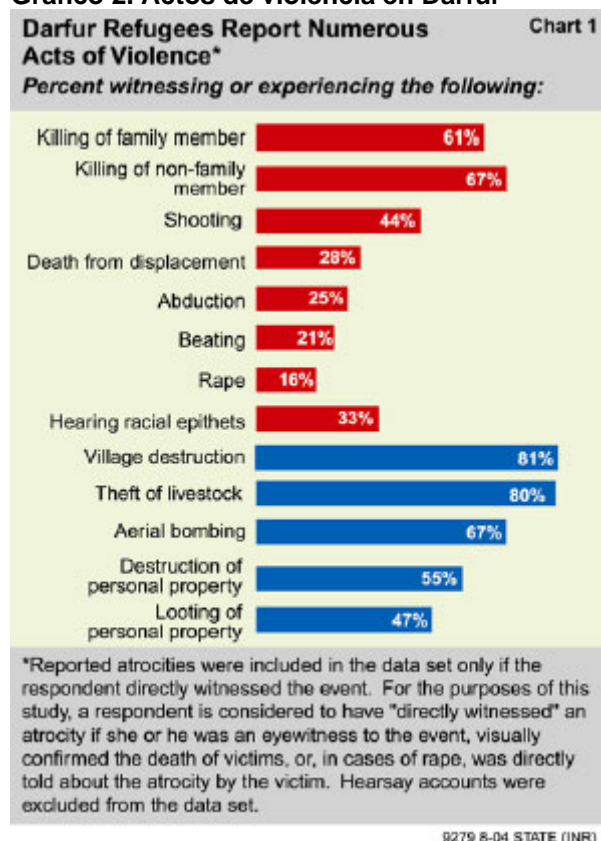
Paradójicamente, la actual crisis surgió en un momento en el que la otra guerra que

² La IGAD (Intergovernmental Authority on Development) fue creada como instrumento de cooperación regional en el Cuerno de África para coordinar el comercio, el desarrollo y la seguridad en la región. Desde 1993, bajo la iniciativa del gobierno de Kenia, inició el proceso de promoción de la paz en Sudán. Hasta 1997 las autoridades sudanesas y las fuerzas rebeldes del sur no aceptaron formalmente su mediación. Está integrada por Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Sudán, Somalia y Uganda.

³ Los seis protocolos son: el Protocolo de Machakos, de 20 de julio de 2002; Acuerdo de Seguridad para el Periodo de Transición, de 25 de septiembre de 2003; Acuerdo sobre Reparto de la Riqueza para el Periodo de Transición, de 7 de enero de 2004; Protocolo sobre el Reparto del Poder, de 26 de mayo de 2004; Protocolo sobre la Resolución del Conflicto del Sur del Kordofán, Montañas de Nuba y las provincias del Nilo Azul, de 26 de mayo de 2004; Protocolo sobre la Resolución del Conflicto en Abyei, de 26 de mayo de 2004.

enfrentaba al gobierno contra las fuerzas meridionales del país se encontraba en una etapa de distensión y negociaciones. La aparición en Darfur, en febrero de 2003, de dos grupos rebeldes –el Ejército/Movimiento de Liberación de Sudán (*Sudan Liberation Movement/Army*, SLM/A), y el Movimiento para la Justicia y la Igualdad (*Justice and Equality Movement*, JEM), coincidiendo con una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición del sur del país en Kenia, no fue una casualidad. Los rebeldes pretendían llamar la atención en el proceso de paz para que sus demandas y la situación de la región de Darfur también se tuvieran en cuenta en las negociaciones.

Gráfico 2. Actos de violencia en Darfur



Fuente: Departamento de Estado norteamericano, septiembre de 2004.

El SLM/A, liderado por Abdel Wahid Mohamed Ahmed Nur, nació fruto de la cooperación de dos grupos: uno integrado por las tribus Fur y Massaleit, que en 2001 habían creado un grupo armado en el sur y oeste de Darfur, y otro que estaba concentrado en el norte, compuesto por guerreros Zaghawa, a los que se habían unido los Meidoub. Entre los fundadores de ambos grupos predominaban los jóvenes graduados a los que se han ido uniendo gente de los centros urbanos, algunos de ellos procedentes de Jartum, y sus ideas políticas están influenciadas por el Frente Nacional Islámico⁴ y los comunistas. Ambos consideraban que el gobierno había perpetuado la hegemonía de la elite del norte y centro del país a costa de la marginalización de las regiones periféricas, y por ello unieron sus demandas y reivindicaciones a principios de 2003. Carecen de recursos, experiencia e incluso tiempo para intentar transmitir sus

⁴ Partido fundamentalista islámico por antonomasia en Sudán. Tuvo un gran peso político e influencia sobre el gobierno de Omar al-Bashir. Su líder, Hasan al-Turabi, fue apresado en 2003 por la intromisión en los asuntos del gobierno central y puesto en libertad en agosto de 2004.

ideales a la población. Tienen establecido golpear exclusivamente a las fuerzas gubernamentales, aunque algunos informes recientes sugieren un deterioro de la disciplina y la realización de ataques contra civiles. Varias fuentes aseguran que existen lazos entre el SLM/A y el SPLA, la fuerza rebelde cristiana del sur del país, en cuanto a provisión de armas, entrenamiento y estrategia, además de ayudar en la elaboración de la declaración política del SLM/A del 13 de marzo de 2003⁵.

La primera acción del SLM/A fue apoderarse de Guru, la capital de Jebel Marrah en Darfur central, pero el gobierno lo consideró, en un primer momento, como una acción aislada y sin apenas importancia. La sorprendente victoria produjo un inmediato apoyo de varios políticos exiliados y de un veterano islamista, Khalil Ibrahim, jefe del JEM, quien reivindicó unirse al SLM/A en su lucha contra el gobierno. Ambos grupos coinciden en sus reivindicaciones con la diferencia de que el SLM/A pide la separación entre el Estado y la religión mientras que el JEM, con fuertes lazos con los círculos de islamistas, no se ha definido en este aspecto.

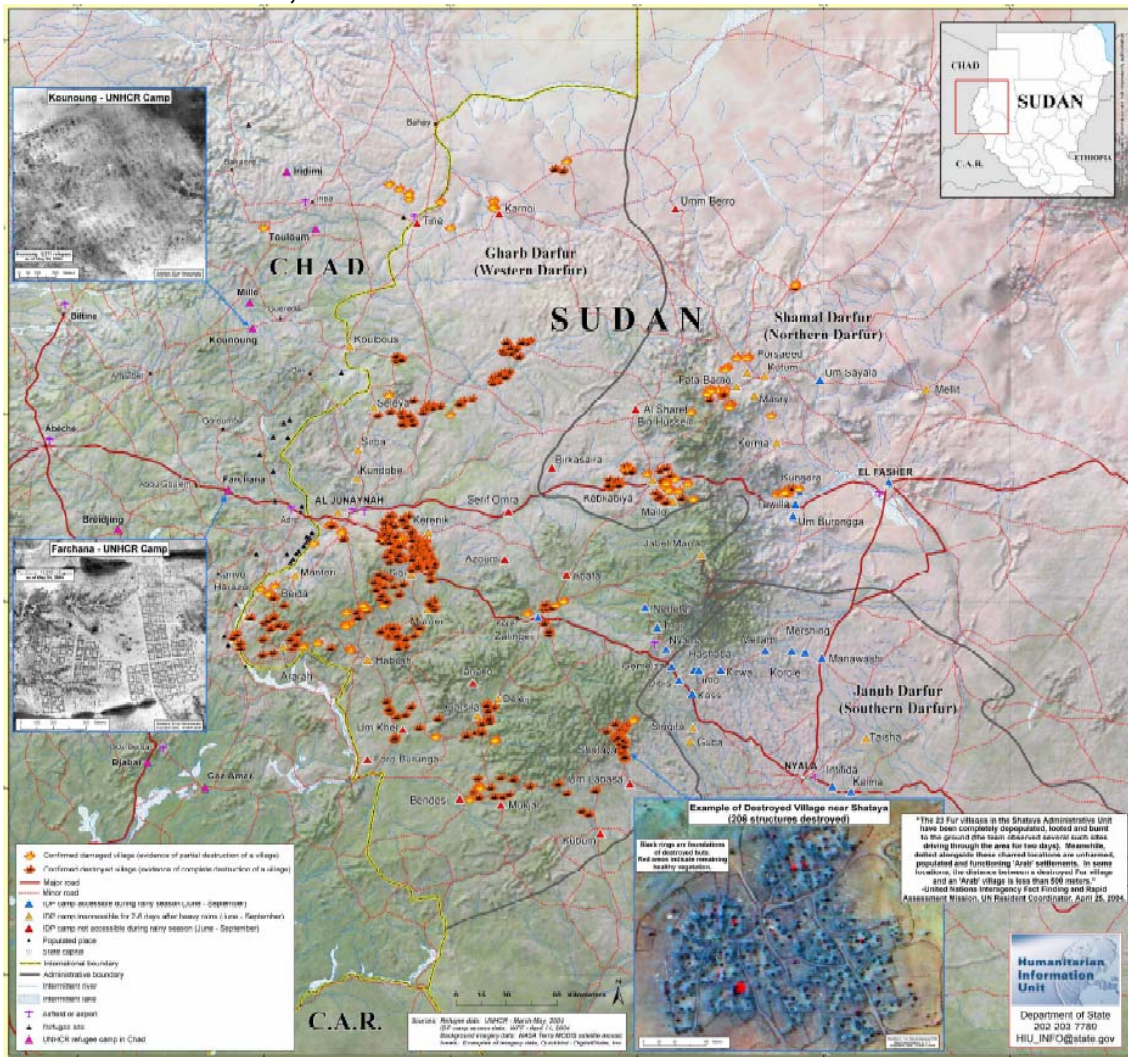
El 25 de abril de 2003, ambos grupos atacaron por sorpresa el aeropuerto de El Fasher y posteriormente las instalaciones gubernamentales en Mellit, Tiné y Kutum, todas ellas situadas en Darfur, dando muerte a decenas de soldados sudaneses, lo que desencadenó la ira del gobierno. El General Abraham Suleiman, gobernador de Darfur, pidió a Jartum dos brigadas para acabar con los insurgentes, según él armados con armas ligeras y fáciles de abatir. Sin embargo, le negaron la petición y seguidamente le destituyeron. Omar al-Bashir decidió recurrir, como en anteriores ocasiones durante la lucha contra el sur cristiano y animista, a todos los medios militares posibles para acabar con ellos. Apeló para sus ataques y persecuciones contra los civiles no-árabes, acusados de apoyar a los rebeldes africanos, a milicias árabes pertenecientes en su mayoría a comunidades que respaldaban la política del Gobierno. Los refugiados que huían hacia el Chad dieron un nombre a los asaltantes, y utilizaron un antiguo calificativo para denominar a los bandidos: los *Yanyawid*.

No era la primera vez que Jartum recurría a las milicias. El 6 de noviembre de 1989, el Gobierno promulgó la Ley sobre las Fuerzas de Defensa Popular, en virtud de la cual reconocía a los grupos armados leales y las milicias tribales nómadas como fuerzas paramilitares. Este hecho puso de manifiesto la intención de las autoridades de utilizar a estos grupos para luchar en su nombre. El Gobierno pasó a depender cada vez más del reclutamiento de las milicias tribales nómadas en formaciones paramilitares denominadas localmente *Murahilin*. Estos grupos nómadas, notoriamente indisciplinados, fueron dotados de prerrogativas ilimitadas para mantener la seguridad en la región y ayudar ocasionalmente en los combates en las zonas de guerra del Sudán meridional, especialmente entre 1991 y 1992. Los *Yanyawid* son los sucesores de las milicias árabes *Murahilin*, montan a caballo o en camello, y se enriquecen robando ganado y atacando a los denominados africanos. Se calcula que son unos 20.000, y entre ellos hay también algunos nómadas árabes que emigraron a Darfur desde el Chad en los años 70 y 80. Según la organización Human Rights Watch, han obtenido armamento, entrenamiento y equipamiento del gobierno sudanés para realizar una operación de “tierra quemada” en Darfur. Uno de sus cabecillas, Musa Hilal, líder de la tribu Um Jallol, estuvo encarcelado por varios actos delictivos y derramamiento de sangre a principios de 2003. Tras el resurgir de la guerrilla en Darfur, fue excarcelado y puesto al

⁵ “Political Declaration SLM/SLA, Minni Arkou Minnawi, Secretary General of SLM/SLA”, 13/III/2003, <http://slma.web1000.com/pd/index.htm>.

mando de los *Yanyawid* para llevar a cabo la ofensiva contra los rebeldes civiles. El gobierno de Jartum ha negado siempre cualquier conexión con los *Yanyawid* a los que prefiere denominar milicias locales o étnicas.

Gráfico 3. Darfur-Chad, aldeas destruidas



Fuente: USAID, junio de 2004.

Bajo el auspicio del presidente del Chad, Idridd Déby, y la presión de EEUU, se logró firmar un alto el fuego el 3 de septiembre de 2003 en el que se estableció una comisión tripartita, compuesta por representantes militares del Chad, de Sudán y de los rebeldes, para vigilar el cese de las hostilidades durante 45 días. Jartum parecía comprometido a alcanzar una solución militar a la crisis pero se reanudaron las hostilidades a los pocos días con un paulatino incremento de violencia por parte de los *Yanyawid* y de las fuerzas gubernamentales.

El 8 abril de 2004, y nuevamente bajo los auspicios del presidente del Chad y de EEUU, Jartum y los grupos rebeldes de Darfur firmaron un nuevo acuerdo de alto al fuego en N'djamena. El acuerdo estableció, en esta ocasión, la creación de una Comisión Conjunta donde la Unión Africana (UA) se comprometía a desplegar un equipo de verificación en la región para vigilar el cese de hostilidades. La Unión Africana, tras el envío previo de una misión de reconocimiento a Darfur, junto con representantes de Naciones Unidas, EEUU, la UE y Francia, aprobó, el 28 de mayo de 2004, el despliegue

inicial de casi un centenar de observadores, que posteriormente serían apoyados por 300 militares para su protección, procedentes de Ghana, Congo-Brazzaville, Nigeria, Mozambique, Kenia, Namibia, Sudáfrica y Senegal, que se establecieron en seis localidades (cinco en Darfur y una en Chad). El 25 de abril en una nueva reunión, donde esta vez sólo estaban presentes las partes implicadas en el conflicto y el gobierno de Chad, se produjo un segundo acuerdo político para establecer una agenda con el objetivo de discutir la situación política, económica y social de la región y encontrar una solución definitiva al conflicto. Además, se reafirmó el cese de hostilidades establecido el 8 de abril y Jartum se comprometió a neutralizar y desarmar a las milicias *Yanyawid*.

La ayuda

Gracias al esfuerzo de varios funcionarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y a pesar de la poca atención que, a nivel internacional, se prestaba a lo que allí estaba ocurriendo, se pudo enviar una misión en abril de 2003, llegando el primer reparto de ayuda humanitaria en agosto⁶. Poco a poco diversas organizaciones internacionales empezaron a alertar sobre el desastre humanitario, pero la repercusión mediática no se produjo hasta un año después de su inicio, al conmemorarse el décimo aniversario del genocidio de Ruanda. No hay que olvidar que el gobierno ha tenido desde el principio una clara estrategia de ocultar el conflicto a su país y al mundo. Cerró dos periódicos independientes, el *Khartoum Monitor* y *Al-Ayam* el 24 de noviembre y el 3 de diciembre de 2003 respectivamente, y posteriormente la oficina de televisión Al-Jazeera el 17 de diciembre, además de negar la concesión de visados y confiscar el material de todo aquel que quería información e informar sobre la situación. Por otro lado, las negociaciones de paz entre el gobierno central y los rebeldes del sur han seguido acaparado todo el protagonismo, y la comunidad internacional ha estado más pendiente de concluir con éxito las negociaciones que ver lo que estaba ocurriendo al oeste del país.

Sin embargo, desde abril de 2003, Amnistía Internacional (AI)⁷, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHR), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA)⁸ y Médicos sin Fronteras⁹ informaron reiteradamente de la catastrófica situación en la que se encontraba la población de Darfur: miles de refugiados huían hacia el Chad, la tasa de mortalidad crecía con extrema rapidez y existían infinidad de dificultades para acceder a todo el territorio y distribuir la ayuda humanitaria. “Este es

⁶ *US Agency for International Development*, “Humanitarian Crisis in Sudan, Testimony before the Committee on Foreign Relations Committee Subcommittee on Africa, United States Senate”, Roger Winter, 15/VI/2004, http://www.usaid.gov/press/speeches/2004/ty040615_1.html.

⁷ *Amnesty International Press Release*, “Sudan: Crisis in Darfur - Urgent Need for International Commission of Inquiry and Monitoring”, 28/IV/2003, <http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR540262003>.

Amnesty International Press Release, “Sudan: Humanitarian Crisis in Darfur Caused by Sudan Government’s Failures”, 25/XI/2003, <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR541012003?open&of=ENG-SDN>.

Amnesty International Press Release, “Sudan: International Community Must Act Now to Guarantee the Protection of Civilians”, 17/II/2004, <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540162004?open&of=ENG-SDN>.

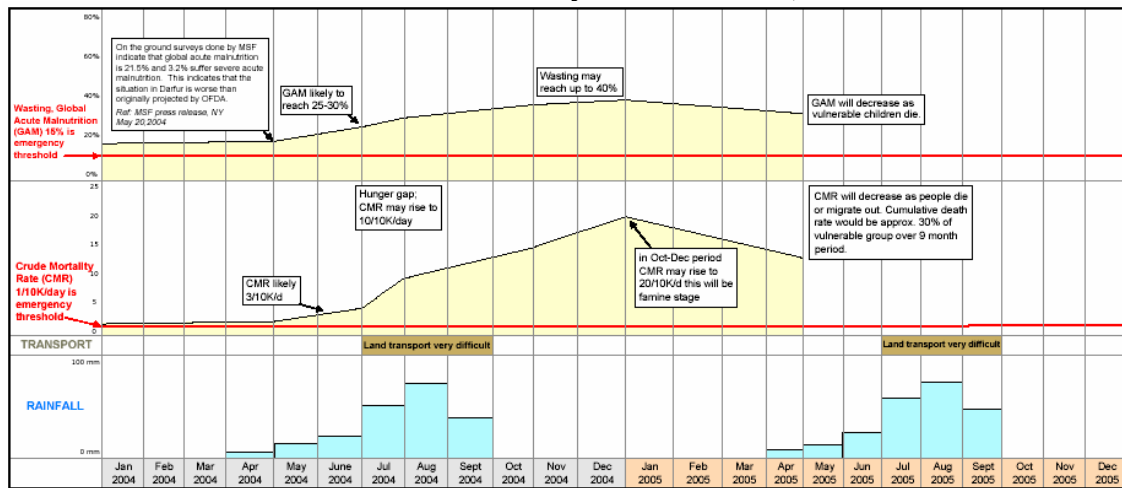
⁸ Recogido en “US Congressional Resolution Condemning the Government of the Republic of the Sudan for its Participation and Complicity in the Attacks Against Innocent Civilians in the Impoverished Darfur Region of Western Sudan”, 6/V/2004, <http://daschle.senate.gov/pdf/S.Con.Res.99Sudan.pdf>.

⁹ *Doctors Without Borders*, “On the Brink of Mass Starvation in Darfur”, 20/V/2004; “Emergency in Darfur, Sudan: No Relief in Sight”, 21/VII/2004, <http://www.doctorswithoutborders.org>.

un acto de limpieza étnica, se trata de la mayor crisis humanitaria del mundo, y no entiendo por qué el mundo no está haciendo nada para remediarlo”¹⁰, fueron las palabras de Mukesh Kapila, coordinador de Naciones Unidas en Sudán en una entrevista concedida a la cadena BBC el 19 de marzo de 2004. Unos días después, y antes de dejar su cargo en la organización, afirmaba: “En este momento, la única diferencia entre Ruanda y Darfur es el número de víctimas involucradas en el conflicto”¹¹.

Durante la conmemoración del genocidio de Ruanda, en abril de 2004, y mientras la Comunidad Internacional se lamentaba por no haber hecho nada para evitar los acontecimientos de 1994, los medios se interesaron por las declaraciones que Kapila había realizado un mes antes. Fue el propio secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien advirtió entonces de la grave situación¹², sugiriendo la posibilidad de llevar a cabo una acción militar si fuera necesario.

Gráfico 4. Tasa de mortalidad en Darfur sin ayuda humanitaria, 2004-2005



1. *CMR and Wasting projections from personal communication from field based epidemiology studies in Bahri-Ghazal, Sudan 1998 and Ethiopia 2000
 2. Background on Food Security in Darfur. Collins, Steve. MD 'How bad does it have to get? The Nutritional Status in N Darfur. Sudan in Spring 2001' Save the Children (UK).
 3. Wasting rates. Office of UN Resident and Humanitarian Coordinator for the Sudan. 10 January 2004; FAO Special Report Sudan February 2004.

Fuente: USAID.

Las cifras de Naciones Unidas, de mayo de 2004, sobre la catástrofe humanitaria hablaban de un balance de 50.000 muertes directas e indirectas, una migración forzada de más de 1.200.000 personas, matanzas, bombardeos, violaciones masivas y organizadas de mujeres y niñas, toma de niños como rehenes, saqueos y destrucción de propiedades y ganados, quema de cosechas y semillas y obstrucción a la ayuda humanitaria y médica. Entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, los cooperantes pudieron acceder a menos del 10% de la población desplazada en el interior de Darfur¹³. Alrededor de 200.000 personas habían cruzado al vecino Chad y el resto vagaba por el interior de Sudán sin posibilidad de volver a sus casas, mientras la situación empeoraba aún más a medida que se acercaba la época de lluvias, entre los meses de junio y

¹⁰ BBC, “Mass Rape Atrocity in West Sudan”, 19/III/2004, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3549325.stm>.

¹¹ Recogido en *The Washington Times*, “Where is the World? New Genocide in Sudan”, por Nat Hentoff, 12/IV/2004, <http://web.mit.edu/utr/www/sudan/articles/0412-wtimes-oped.txt>.

¹² “Secretary General Observes International Day of Reflection on 1994 Genocide”, 7/IV/2004, <http://www.unog.ch/news2/documents/newsen/sg04003e.htm>.

¹³ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Consolidated Appeals Process (CAP): Revised Appeal for the Sudan Assistance Programme (ASAP 2004) - Darfur Crisis”, 4/V/2004, <http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/0/0ebe9cf63cdeb72a49256e71000b4541?OpenDocument>.

septiembre. El acceso a algunos campos quedaría, entonces, prácticamente bloqueado y provocaría brotes de paludismo y cólera.

El 3 de julio, en un comunicado conjunto del secretario general de Naciones Unidas y el presidente al-Bashir, el gobierno sudanés se comprometió a facilitar el acceso humanitario a la zona, a resguardar los derechos humanos, a mejorar la seguridad y a iniciar de inmediato el desarme de las milicias. Posteriormente, el 15 de julio, tres meses después de la firma del acuerdo de N'Jamena (Chad) de cese de hostilidades, que desde entonces supervisa un grupo de observadores de la Unión Africana, al-Bashir y el SLM/A y JEM se sentaron a negociar, esta vez en Addis Abeba, puesto que los grupos insurgentes consideran que el gobierno del Chad no es un mediador neutral y actúa según los intereses de Jartum. Las acusaciones mutuas de violar sistemáticamente el alto el fuego y las diferencias internas en el gobierno y entre los dos grupos rebeldes impidieron que se alcanzara ningún acuerdo.

EEUU, mientras tanto, había iniciado un lento proceso, junto con el Reino Unido, para promover un borrador de resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El debate sobre la calificación de la crisis como genocidio o no y el inquietante nivel de apoyo de algunos países como Francia, amigo de Jartum, China, con fuertes inversiones en los pozos de petróleo del país, y Rusia, que vende armas al gobierno sudanés, pusieron grandes impedimentos y obstáculos para que se alcanzara una resolución categórica, que finalmente resultó ser mucho más suave y tímida de lo que algunos esperaban, reflejando una vez más las divisiones que existen dentro de Naciones Unidas. La Resolución 1556, de 30 de julio de 2004, adoptada bajo el Capítulo VII de Naciones Unidas –en virtud del cual el Consejo puede tomar medidas que van desde sanciones económicas hasta la acción militar internacional para mantener o restablecer la paz– instaba a Jartum a facilitar el acceso de asistencia humanitaria, a establecer las necesarias condiciones de seguridad, a cumplir su compromiso de desarmar las milicias *Yanyawid*, y a capturar y procesar a sus líderes en el plazo de un mes. En el punto 6 de la resolución, el Consejo “expresa su intención de examinar la posibilidad de adoptar otras medidas en relación con el gobierno de Sudán, incluidas las medidas previstas en el artículo 41 de la Carta de la Naciones Unidas, en el caso de incumplimiento”. Las medidas especificadas en dicho artículo no incluyen el uso de la fuerza, lo cual sólo puede ser interpretado como una total carencia de voluntad por parte de la comunidad internacional de llevar a cabo una acción seria. Para más burla, el 5 de agosto de 2004, el representante especial de Naciones Unidas para Darfur firmó un “Plan de Acción” con Jartum según el cual el gobierno sudanés podía limitarse a mostrar cierta voluntad de cumplir alguno de los compromisos exigidos en la resolución recién aprobada, quitando toda validez al plazo de 30 días establecido en la 1556. Lo único que logró la ONU fue anular cualquier incentivo para que el gobierno cumpliera las demandas que, como era de prever, no llevó a cabo. Tras cumplirse el plazo de un mes, la única diferencia con respecto a 30 días antes era que el umbral de emergencia humanitaria se estaba incrementando peligrosamente¹⁴.

Mientras se intentaba, en varias ocasiones, reanudar las conversaciones de paz entre las partes implicadas, el 18 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva la resolución, la 1564. En ella se consideró, nuevamente, la posibilidad de adoptar algún tipo de medidas en el caso de la no cooperación del gobierno sudanés y

¹⁴ World Health Organization, “Retrospective Mortality Survey Among the Internally Displaced Population, Greater Darfur, Sudan, August 2004”, 15/IX/2004.

que podrían afectar al sector petrolífero del país. También se estableció la creación de una comisión internacional de investigación para que determinara si se habían producido actos de genocidio. Conforme a la resolución, se instaba a los países a respaldar a la Unión Africana en la ampliación de la misión de vigilancia mediante el suministro de apoyo logístico y financiero. Tras esta segunda resolución pareció haber un avance en la voluntad de frenar la grave situación tras dos importantes acontecimientos. Por un lado, a finales de octubre el gobierno sudanés aceptó, tras dos meses de continuos rechazos, la ampliación del número de tropas y la revisión del mandato de la misión de verificación de la Unión Africana en Darfur. Se espera que la UA despliegue, antes de final de año, 3.321 efectivos de los cuales 2.342 serán militares, 815 policías y 164 civiles, que darán protección tanto a sus propios supervisores de la UA, ya desplazados a la zona, como a quienes desempeñen labores civiles y humanitarias. El Ejecutivo de Jartum se reserva, sin embargo, el derecho a dar por finalizada la misión en cualquier momento, y limita sus competencias exclusivamente a observar el alto el fuego y asegurar la ayuda humanitaria, y descarta el despliegue de tropas no africanas. Por otro lado, el gobierno sudanés y las fuerzas rebeldes, firmaron, el 9 de noviembre en la capital nigeriana, dos protocolos de seguridad y acceso humanitario, por los que se establece una zona de exclusión aérea para acabar con los frecuentes ataques de la aviación sudanesa contra las aldeas de la zona, y garantizar la llegada de la ayuda humanitaria a los civiles desplazados por el conflicto.

Una última resolución –la 1574– fue aprobada el 19 de noviembre en Nairobi en una reunión de un alto valor simbólico, ya que no es habitual que el Consejo se reúna fuera de su sede en Nueva York. La importancia de este gesto se ha visto empañada por una resolución que tampoco esta vez contempla medidas más contundentes, una vez constatado que la situación en Darfur no ha mejorado y que los abusos continúan. La resolución se centra principalmente en el proceso de paz de la larga guerra civil entre el gobierno sudanés y las fuerzas del SPLA en el sur del país que, tras la firma del Memorando de Entendimiento el 19 de noviembre de 2004, se comprometen a alcanzar un acuerdo de paz antes del 31 de diciembre de 2004. Nuevamente, esta larga guerra civil volvió a acaparar el protagonismo dejando prácticamente en el olvido la situación en el oeste del país. “Es un paso adelante para el conflicto Norte-Sur, es un paso atrás para Darfur”, declaró por su parte la organización Human Rights Watch. A diferencia de las dos resoluciones anteriores, no se menciona la necesidad de establecer las precisas condiciones de seguridad, ni de que el gobierno sudanés cumpla su compromiso de desarmar las milicias *Yanyawid*, ni de capturar y procesar a sus líderes, y por supuesto no contempla la aplicación de sanción alguna.

La situación apenas ha cambiado. Las últimas cifras de Naciones Unidas, del 15 de octubre de 2004, elevan el número de muertos a 70.000. El 28 de octubre, el Programa Mundial de Alimentos advertía que 1.700.000 personas dependían de la ayuda internacional en esta región en el oeste de Sudán al menos hasta 2005. Según la investigación realizada por el organismo entre los niños menores de cinco años, la tasa de malnutrición era del 10% al 12% antes del comienzo del conflicto en febrero de 2003, frente al 22% que aparece en la actualidad. Además, las consecuencias de Darfur se han extendido al Chad, que no tiene capacidad para absorber tal cantidad de recién llegados. Chad es uno de los diez países más pobres del mundo. En la zona donde están los refugiados la esperanza de vida no llega a los 40 años, y esta explosión demográfica puede generar también enfrentamientos violentos en la lucha por unos recursos básicos

que ya de por sí son muy escasos.

Comunidad internacional

La “crisis humanitaria más grande del mundo”, como ha sido definida por Naciones Unidas, no se trata únicamente de un problema humanitario sino también de un problema político, porque se ha debido principalmente a la acción directa e indirecta de una entidad política. El gobierno de al-Bashir sigue sin dar ningún tipo de garantía de que se pueda negociar con él. No podemos fiarnos de un gobierno que nunca ha mantenido en secreto su relación con organizaciones terroristas como la Jihad Islámica o Hamas o que ha institucionalizado los vínculos con Hezbollah; que ha demostrado que cualquier cambio de comportamiento ha sido siempre temporal y nunca permanente; que se ha comprometido en cuatro ocasiones a desarmar a las milicias (en la firma del cese de hostilidades de 8 de abril de 2004, en la reafirmación de dicho acuerdo el 25 de abril de 2004, en el comunicado conjunto firmado con la ONU el 3 de julio de 2004, y en el Plan de Acción firmado con Naciones Unidas el 5 de agosto de 2004; que sigue negando que apoye a las milicias árabes.

EEUU ha sido el país que más ha presionado para encontrar una solución a la actual crisis de Darfur, aunque no lo suficiente. Su Congreso fue el primero en declarar oficialmente, en julio de 2004, que se estaba cometiendo un genocidio en Darfur¹⁵, afirmación que reiteró Colin Powell el 9 de septiembre. EEUU ya desempeñó un papel clave en las negociaciones entre el régimen de Sudán y los rebeldes cristianos del sur debido, en parte, a que Sudán ha levantado siempre mucha expectación entre el electorado norteamericano, principalmente entre los grupos cristianos y afroamericanos. El actual régimen, producto de un golpe de Estado en 1989 y de corriente fundamentalista islámica, ha apoyado al terrorismo durante más de 15 años. Sudán se convirtió en un paraíso para los terroristas, incluido Osama bin Laden, quien se instaló en el país en 1991. EEUU lo incluyó en 1993 en su *lista negra* de Estados sospechosos de apadrinar el terrorismo internacional. Tres años después, en 1996, retiró a su embajador por supuestas amenazas terroristas contra funcionarios norteamericanos y junto con Arabia Saudí presionó al gobierno de Jartum para expulsar a bin Laden, que seguidamente se dirigió a Afganistán. Un año después, imponía de manera unilateral sanciones económicas, comerciales y financieras por el continuo apoyo de Jartum a los terroristas. En 1998, tras los ataques de al-Qaeda contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, ordenó el ataque contra una empresa farmacéutica en Al Shifa, de quien se sospechaba estuviera produciendo armas químicas. Tras el 11-S y la guerra en Afganistán, al-Bashir moderó su apoyo al terrorismo y puso nuevamente en marcha el proceso de paz para acabar con la larga guerra civil. Pero cuando al-Bashir decidió lanzar una campaña contra Darfur, tras el levantamiento en febrero de 2003, Washington se encontró con un nuevo problema. Fue precisamente el miedo a que se paralizara el proceso de paz que se había reabierto lo que frenó a EEUU para actuar firmemente en el conflicto. Además, sus compromisos en Irak y Afganistán, y el creciente anti-americanismo que provoca sistemáticos rechazos a cualquier propuesta norteamericana, se han traducido en una lenta implicación estadounidense en la resolución de la crisis. Durante su esfuerzo por sacar adelante una resolución en el Consejo de Seguridad se le acusó de moverse con el único interés de explotar las reservas de petróleo del país. Desde las sanciones impuestas por EEUU en 1997, está prohibida cualquier inversión americana en el sector petrolífero, cuyos yacimientos

¹⁵ Asamblea General de Naciones Unidas, “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, 9/XII/1948, <http://www.preventgenocide.org/es/derecho/convencion/textos.htm>.

están situados en el sur del país. Cabe recordar las palabras del ministro de Información Mahdi Ibrahim, en julio de 2001: “Queremos la inversión de EEUU más que cualquier otra”. Según British Petroleum, la producción fue de 250.000 barriles por día (bdp) en 2003, un 0.3% de la producción mundial, y se espera alcanzar los 400.000 bdp en 2005. China es el país con mayor presencia en este sector –Sudán es su cuarto proveedor– al que siguen países como Canadá, Austria y Suecia.

La Unión Europea permanece ante la crisis, simplemente, expectante. Se limita a emitir comunicados dando fe de la situación de inseguridad que se vive y se proclama como uno de los grandes donantes de fondos para Sudán –unos 215 millones de euros de los más de 700 que Naciones Unidas ha establecido como necesarios–. Pero en el caso de que fuera necesario hacer uso de la fuerza, además de carecer de medios militares suficientes para abordar la situación, los europeos querrían evitar a toda costa cualquier choque con el mundo árabe que ponga en duda su papel de conciliador. Les cuesta todavía aceptar la legitimidad del uso de la fuerza cuando los derechos humanos se encuentran en serio peligro y se tienen que imponer al principio de soberanía de los Estados. Por otro lado, la Liga Árabe, organización a la que pertenece Sudán junto a otros 21 Estados y con capacidad y peso para negociar con Jartum, ha actuado, como tantas otras veces, ignorando el problema. La organización defiende los intereses de los Estados árabes, pero de sus gobiernos, no de la población.

La voluntad de la joven Unión Africana (UA) de involucrarse en la gestión de la crisis es lo más alentador de la respuesta internacional. Integrada por 53 naciones, tiene alrededor de un centenar de observadores en Darfur, protegidos por unos 300 soldados ruandeses y nigerianos que deberán llegar hasta 3.000 a finales de año, a fin de garantizar que se cumpla la tregua firmada en abril de 2003 y vigilar la frontera del Chad, donde llegan los ataques aéreos de Jartum. Representa una verdadera prueba para ellos porque se trata de la primera iniciativa africana para sacar a un país de un conflicto. De hecho, insisten reiteradamente en que se trata de un asunto africano, como así ocurrió en una mini cumbre africana, celebrada el 17 de octubre de 2004, impulsada por el presidente nigeriano, actual jefe de la UA, y a la que acudieron los representantes de Libia, Chad, Egipto y el propio Sudán¹⁶. La pequeña fuerza de la UA puede ser un recurso, pero tiene que crecer significativamente para cubrir todo el terreno, además de ampliar las competencias de su mandato. Carecen de los recursos necesarios para emprender una intervención fuerte y urgente en Darfur. Romeo Dallaire, el general canadiense que lideró la misión de mantenimiento de la paz tras el genocidio de Ruanda, asegura que se necesitarían al menos 44.000 soldados para asegurar la paz en Darfur. La Unión Africana es consciente de sus necesidades y ha solicitado a la comunidad internacional una financiación de 220 millones de dólares, pero por ahora sólo ha recibido 80 millones.

Tampoco debemos separar el problema de Darfur de la guerra civil que ha asolado el país durante más de 20 años y su proceso de paz. Se cometió el error de etiquetarlo como un enfrentamiento entre el norte y el sur en vez de una guerra entre un gobierno intolerante, cuya zona de influencia geográfica se identifica con el norte y centro del país, y las regiones periféricas, y el resto del país. La crisis de Darfur es sólo uno más de los muchos problemas que asolan un país donde el reparto de los recursos naturales está exageradamente desequilibrado, y donde existen, desde su independencia en 1956,

¹⁶ “Final Communiqué of the African Quintet Summit on Darfur”, Liga Árabe, 17/X/2004, http://www.arableagueonline.org/arableague/picture_gallery/finalcommunique17-10-2004.pdf.

profundas diferencias sociales, confrontaciones religiosas y problemas interétnicos. Darfur no es la única región conflictiva y existe la posibilidad de nuevas revueltas contra el poder central en otros puntos, con la consiguiente mano dura del gobierno. Sin ir mas lejos, a mediados de enero de 2004, el SLM/A firmó una alianza con el Congreso Beja, un grupo armado que opera en los estados más deprimidos del este del país y que forma parte de la Alianza Nacional Democrática (*National Democratic Alliance*, NDA), entidad que aglutina a los principales movimientos opositores a Jartum y a la que pertenecen el SPLA, las fuerzas rebeldes del sur, y el SLM/A de Darfur. Para complicar aún más la situación, el gobierno ha empezado una tercera vía de negociaciones (la primera con el sur de la región y la segunda con los insurgentes de Darfur) con el NDA.

La actuación de Naciones Unidas sigue siendo escasa, empezando por la reelección de Sudán, en mayo de 2004, como uno de los representantes del Grupo Africano ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La última resolución del Consejo de Seguridad, de noviembre de 2004, demuestra que las cosas no han cambiado. Las sanciones que la ONU anunció en las dos resoluciones anteriores y que nunca se atrevió a poner en práctica, ni siquiera son ya objeto de mención expresa en la 1574. Mientras las organizaciones humanitarias claman rapidez y una acción internacional más decisiva, Naciones Unidas da más tiempo al gobierno de Jartum, que continúa arrasando aldeas con sus aviones y dando vía libre a la actuación de los *Yanyawid*. Es un error que la Resolución 1574 prevea el despliegue de 7.000 tropas para vigilar el proceso de paz en el sur de Sudán y omita la necesidad de una supervisión internacional en Darfur, porque es muy arriesgado pedir al régimen de al-Bashir que restablezca por sí solo la seguridad en la región. En agosto de 2004 aseguró haber desplegado 5.000 policías en Darfur precisamente para devolver la seguridad a la población civil pero, según Human Rights Watch, los *Yanyawid* han sido incorporados a las fuerzas policiales y también militares, e incluso se les ha encomendado la seguridad de los campos de refugiados. Naciones Unidas sólo ha reflejado su escasa capacidad de respuesta y los límites de su sistema de seguridad para actuar frente a situaciones como ésta. Su cacareado multilateralismo, meticulosamente consultivo, no sirve de nada mientras miles de personas siguen muriendo a medida que pasan los meses.

Conclusiones: Además de la seguridad en la región, sin duda es imprescindible que se produzca inmediatamente un importante aumento de los recursos humanos y de los suministros médicos, de alimentos y de fondos para poder hacer frente aunque sólo sea a las necesidades más básicas de los desplazados y refugiados. Es importante que el mundo actúe, no sólo para salvar a Darfur, sino también para prevenir otros casos similares. Los desplazados necesitan una ayuda masiva y Naciones Unidas ha recibido menos de la mitad de los más de 722 millones de dólares que se estiman necesarios para aliviar la crisis humanitaria. Ni siquiera en este campo la respuesta internacional ha estado a la altura de las circunstancias. Es una cuestión de credibilidad. Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos están en entredicho. ¿Diez años después de Ruanda, qué es lo que hemos aprendido?

Carlota García Encina